

Personas con TPS y su purgatorio migratorio por 30 años

Basado en el artículo publicado por *The New York Times Magazine*

11 de Abril de 2021 - Por Marcela Valdes



“No quería vivir en la sombra: el drama de los beneficiarios del TPS en Estados Unidos”



PERSONAS CON TPS HAN COMPROBADO DE SOBRA SU LEGITIMIDAD

La cancelación del TPS ha sido o puede ser la mayor operación de separación familiar de la historia de Estados Unidos.

Personas beneficiarias de TPS y DACA son las más investigadas y que se les ha hecho comprobaciones periódicas de antecedentes más que a nadie en la historia de inmigración de Estados Unidos. Cada 6 o 18 meses deben renovar su permiso de trabajo. Las personas con TPS pueden solicitar la renovación de sus tarjetas TPS si pagan otra cuota y pasan por otra

comprobación de antecedentes.

Según la profesora Cecilia Menjivar “El proceso en sí mismo está cargado de ansiedad —especialmente en el momento de la expiración y la renovación— porque cualquier paso en falso, el incumplimiento de un plazo, la falta de información o un error en un formulario pueden originar una denegación y la deportación”.

La mayoría de las personas con TPS, dijo en un informe de 2017, trabajan en la construcción, la pintura, la limpieza, la cocina y el cuidado de niños. Casi el 90 por ciento tiene trabajo y el 90 por ciento declara impuestos sobre la renta cada año. En su oficina en Washington, McGovern tiene un cartel que muestra a los seis jesuitas asesinados y una fotografía de un mural salvadoreño que representa al arzobispo Romero, a quien el papa Francisco canonizó en 2018. “Ayudar a las personas con TPS a regularizar su estado y convertirse en ciudadanos sería un paso en la dirección correcta”, dijo.

RAÍCES DE LA MIGRACIÓN OBLIGADA O FORZADA

POLÍTICAS EXTERIORES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS



“Hicimos daño a la gente de El Salvador. Creo que tenemos el deber de corregirlo”.

Jim McGovern

Como miembro del personal del Congreso en la década de 1980, McGovern trabajó en la creación del estatuto original del TPS. A diferencia de muchos políticos, recuerda que el TPS fue una respuesta a la política exterior de Estados Unidos en El Salvador y a su discriminación contra los refugiados salvadoreños.

En marzo, la representante por California Lucille Roybal-Allard presentó una nueva versión de la Ley de Promesa y Sueño Americano, que otorgaría estatus legal permanente condicional a los beneficiarios de DACA y TPS. Pero a medida que los migrantes centroamericanos llegan a nuestra frontera sur, las posibilidades de aprobar cualquier proyecto de ley que incluya legalizaciones permanentes disminuyen. Ahora parece poco probable que el Congreso logre un progreso real en la reforma del sistema, lo que deja una vez más a millones de inmigrantes vulnerables a las cambiantes agendas de los presidentes de Estados Unidos.

En 2018, casi dos millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos eran de Centroamérica, más que de cualquier otra región excepto México. Mucha gente ha oído hablar de la violencia, la anarquía y la miseria que provocan que estas personas ingresen a Estados Unidos. Pero pocos recuerdan el papel de Estados Unidos en la creación de estas condiciones durante la Guerra Fría.

Guatemala, en 1954, Estados Unidos derrocó a un presidente elegido democráticamente que trató de implementar reformas laborales y agrarias.



Honduras, gastó más de mil millones de dólares en ayuda militar y apoyó tácitamente a los escuadrones de la muerte.

Nicaragua, financió una guerra encubierta contra un gobierno socialista y llenó un puerto de minas.

Costa Rica, en cambio no es una fuente importante de inmigración a los Estados Unidos; A diferencia de sus vecinos, Costa Rica evitó la intervención militar de Estados Unidos.

Panamá, estableció una Zona del Canal neocolonial y estableció la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos, que capacitó a unos 60.000 oficiales militares latinoamericanos en el uso de técnicas de tortura y ejecución.

En un mensaje de 1904 al Congreso, el presidente Theodore Roosevelt justificó explícitamente la intervención de Estados Unidos en cualquier lugar de América Latina con el argumento de que una “nación civilizada”, como Estados Unidos, debería ejercer “un poder policial internacional”. El Salvador podría haberse recuperado de su experiencia con ese poder si el presidente Bill Clinton no hubiera firmado la Ley de Reforma de la

Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante en 1996. Este proyecto de ley popular aceleró la deportación de criminales, y estas expulsiones



enviaron delincuentes violentos a El Salvador, un país que aún no había recuperado el Estado de derecho. Las deportaciones ayudaron a transformar una peligrosa pandilla de California, la MS-13, en un sindicato criminal transnacional que aterroriza a gran parte del país.

“Nunca ha habido nada de naturaleza legal que reconozca la culpabilidad de Estados Unidos por estas condiciones”, dijo Karen Musalo, profesora de derecho internacional en la Universidad de California-Hastings. “Y parece haber, francamente, una amnesia total al respecto”. El gobierno de Biden ha sugerido que Estados Unidos gaste 4000 millones de dólares “para abordar las causas subyacentes de la migración” desde Centroamérica. Pero la historia sugiere que el dinero por sí solo no es la solución. En las manos equivocadas, con los incentivos equivocados, el dinero se convierte en parte del problema.

POBREZA, DESASTRES NATURALES, VIOLENCIA, PANDILLAS Y NARCOTRÁFICO

En febrero de 1980, el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, escribió una carta al presidente Jimmy Carter en la que le pedía que no siguiera adelante con un paquete de ayuda de casi 50 millones de dólares que enviaría asesores y equipos militares estadounidenses a la junta cívico-militar que entonces gobernaba El Salvador.

“La contribución de su gobierno”, escribió Romero, “en lugar de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador agudiza sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado que muchas veces ha estado luchando porque se respeten sus derechos humanos más fundamentales”.

Ignorando la objeción de Romero, Carter siguió adelante con la ayuda al gobierno de El Salvador en 1980. Cuando el presidente Ronald Reagan asumió el cargo al año siguiente, convirtió el apoyo a la junta salvadoreña en una prioridad de la política exterior.

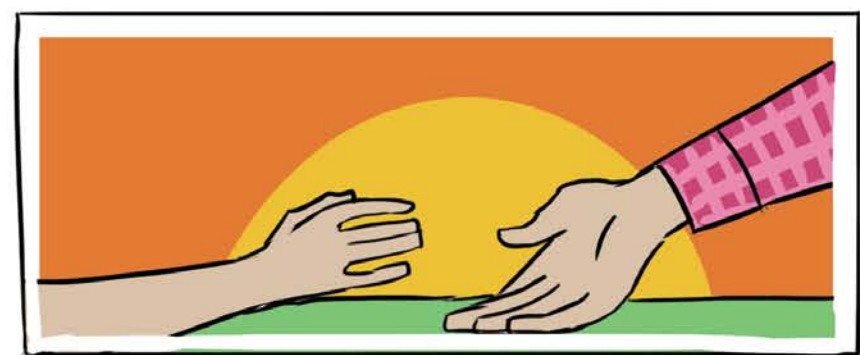
En 1992, Estados Unidos había enviado más de 4000 millones de dólares al gobierno de El Salvador, a pesar de los informes sobre torturas, violaciones, asesinatos y masacres. A la vez, miles migraron de Centroamérica. De cientos y hasta miles de casos de asilo para salvadoreños y guatemaltecos que huían



de las guerras civiles, ningún caso de asilo era aprobado. En estados Unidos, esto provocó muchos intentos, fallidos de pasar una ley integral de inmigración que fuese más humana y menos discriminativa.

Ante esta perversión del proceso de asilo, algunas iglesias y sinagogas del suroeste estadounidense decidieron ayudar a los salvadoreños y guatemaltecos a entrar y permanecer en Estados Unidos de manera ilegal. En 1984, este movimiento de santuarios incluía a 185 instituciones religiosas del suroeste, el medio oeste y el este de Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento sufrió un grave revés ese mismo año, cuando más de media docena de sus partidarios estadounidenses fueron acusados de transportar y albergar a extranjeros indocumentados en Texas y Arizona.

Unos 2,3 millones de hispano estadounidenses tienen sus raíces en El Salvador, más que en cualquier otro lugar excepto México y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Muchos señalan la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 como el catalizador de esta inmigración. Pero según el testimonio de un funcionario del Departamento del Censo ante el Congreso en 1985, los salvadoreños no empezaron a abandonar su país en masa hasta abril de 1980, 15 años después de la aprobación de esa ley.



1980

Se calculaba que había **92.000** salvadoreños nacidos en el extranjero viviendo en Estados Unidos.

1990

Esa cifra se había disparado a **459.000**.

¿POR QUÉ CIENTOS DE MILES DE SALVADOREÑOS SE TRASLADARON A ESTADOS UNIDOS EN UNA SOLA DÉCADA?

NACE EL TPS: HISTORIAS, ABOGACÍA Y UN CAMPEÓN POR LA LUCHA HUMANITARIA

En 1983, después de que los esfuerzos para presionar a los funcionarios de Reagan resultaron inútiles, Joe Moakley representante de Boston, comenzó a presentar enmiendas a varios proyectos de ley de la Cámara para intentar suspender las deportaciones de salvadoreños.

Luego, el 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas fueron sacados de su casa en San Salvador y los asesinaron. Sus cuerpos fueron acribillados a balazos, su cocinera y su hija de 16 años también fueron asesinadas. Días después de los asesinatos, el Congreso aprobó otros 85 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador, a pesar de la oposición del Consejo Nacional de Iglesias, la federación religiosa más grande de Estados Unidos.

Un año después, Moakley adjuntó una disposición a una ley de inmigración que se abrió paso en el Congreso, proponiendo otorgar a los salvadoreños protección temporal contra la deportación. “Cualquiera que me diga que El Salvador es un lugar seguro está viviendo en La La Land”, recuerda McGovern que dijo Moakley. “Tienes sacerdotes que son asesinados a sangre fría. Los estudiantes están siendo atacados. Los sindicatos están siendo atacados”. Para ese entonces, Moakley ejercía el poder como presidente del Comité de Reglas de la Cámara. Moakley dijo a sus oponentes que no sometería a votación la Ley de Inmigración de 1990 en la Cámara a menos que se adjuntara su enmienda para crear el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños.

La disposición de Moakley no solo protegió a los salvadoreños; sino que creó una forma completamente nueva para que el gobierno federal permitiese a los migrantes de países

específicos evitar la deportación. A diferencia del asilo, que requiere que las personas demuestren un temor bien fundado a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un determinado grupo social, el TPS permite al gobierno ayudar a toda clase de personas cuyas condiciones de vida se han vuelto insostenibles.

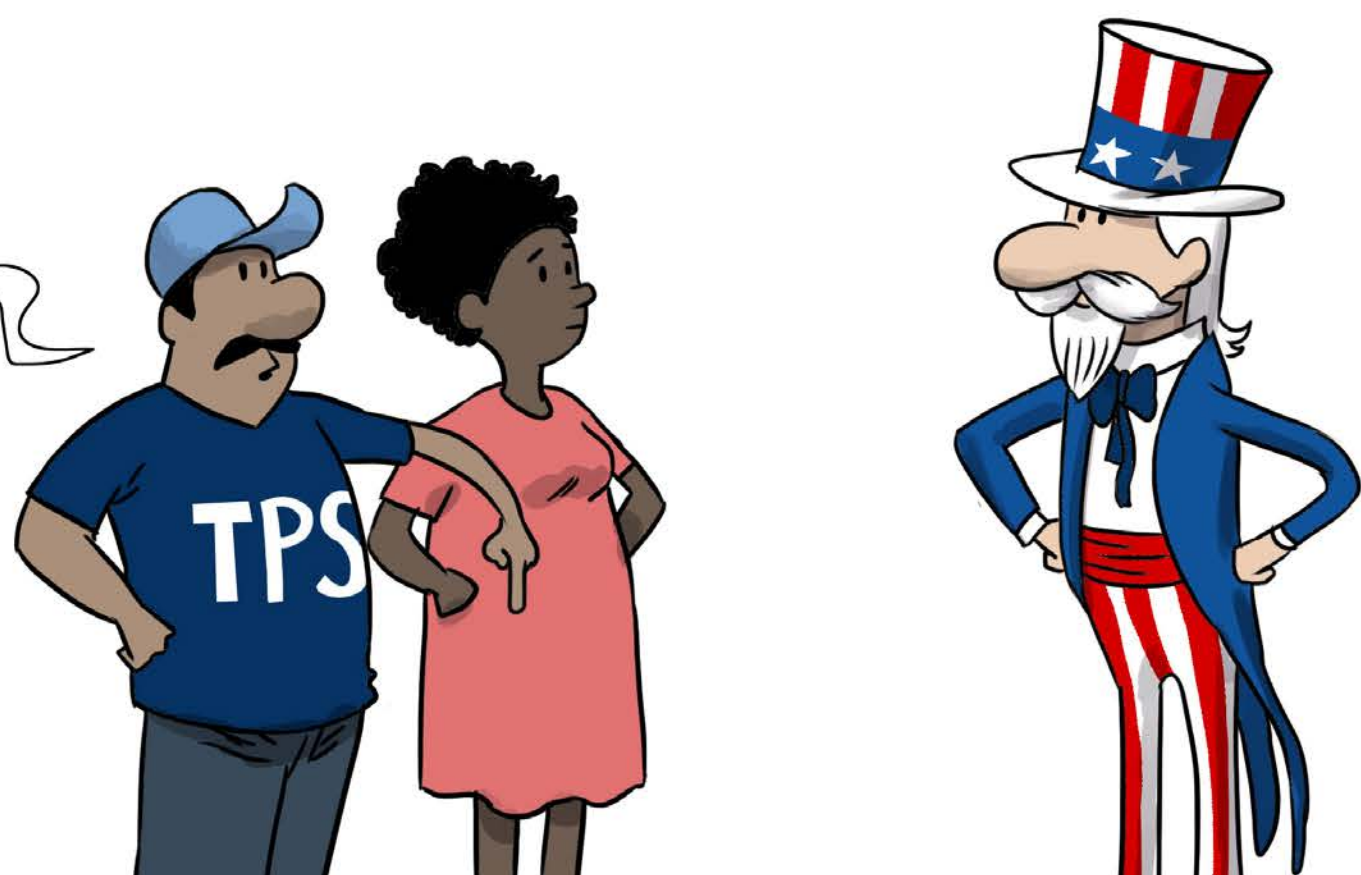


NUESTRA HUMANIDAD ESTA AMENAZADA

El DACA, el TPS y el asilo político encajan en esta categoría altruista, y todos ellos provocaron la ira especial de los funcionarios de Trump, que los consideraron formas de “amnistía” que atraían a inmigrantes indeseables. Intentaron deliberadamente hacer retroceder 40 años de política de inmigración. “Todas las políticas que está adoptando el gobierno Trump”, me dijo el año pasado Lucas Guttentag, profesor de Derecho en Stanford y Yale, “y su desmantelamiento del sistema de asilo de la frontera sur, suponen un completo desprecio del sufrimiento humano y de los derechos legales que se aplican”.

En los últimos meses, cuando miles de centroamericanos han viajado a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de que el gobierno de Biden los deje entrar, algunos miembros del Congreso han empezado a sugerir que cualquier reforma migratoria debe esperar hasta que termine este patrón de migración. Pero este ultimátum retórico elude la responsabilidad de los estadounidenses en esta crisis humanitaria. Muchos de estos aspirantes a inmigrantes tratan de escapar de condiciones realmente amenazantes para sus vidas, y tienen el derecho — reconocido a nivel internacional— de solicitar asilo y a que sus reclamaciones sean consideradas. En muchos casos, la violencia de la que huyen tiene sus raíces en más de una década de la política exterior estadounidense.

SOMOS HUMANOS,
MIGRAR ES UN DERECHO
DE TODAS Y TODOS...
ESTAMOS ACÁ PORQUE
USTEDES ESTUVIERON
ALLÁ PRIMERO

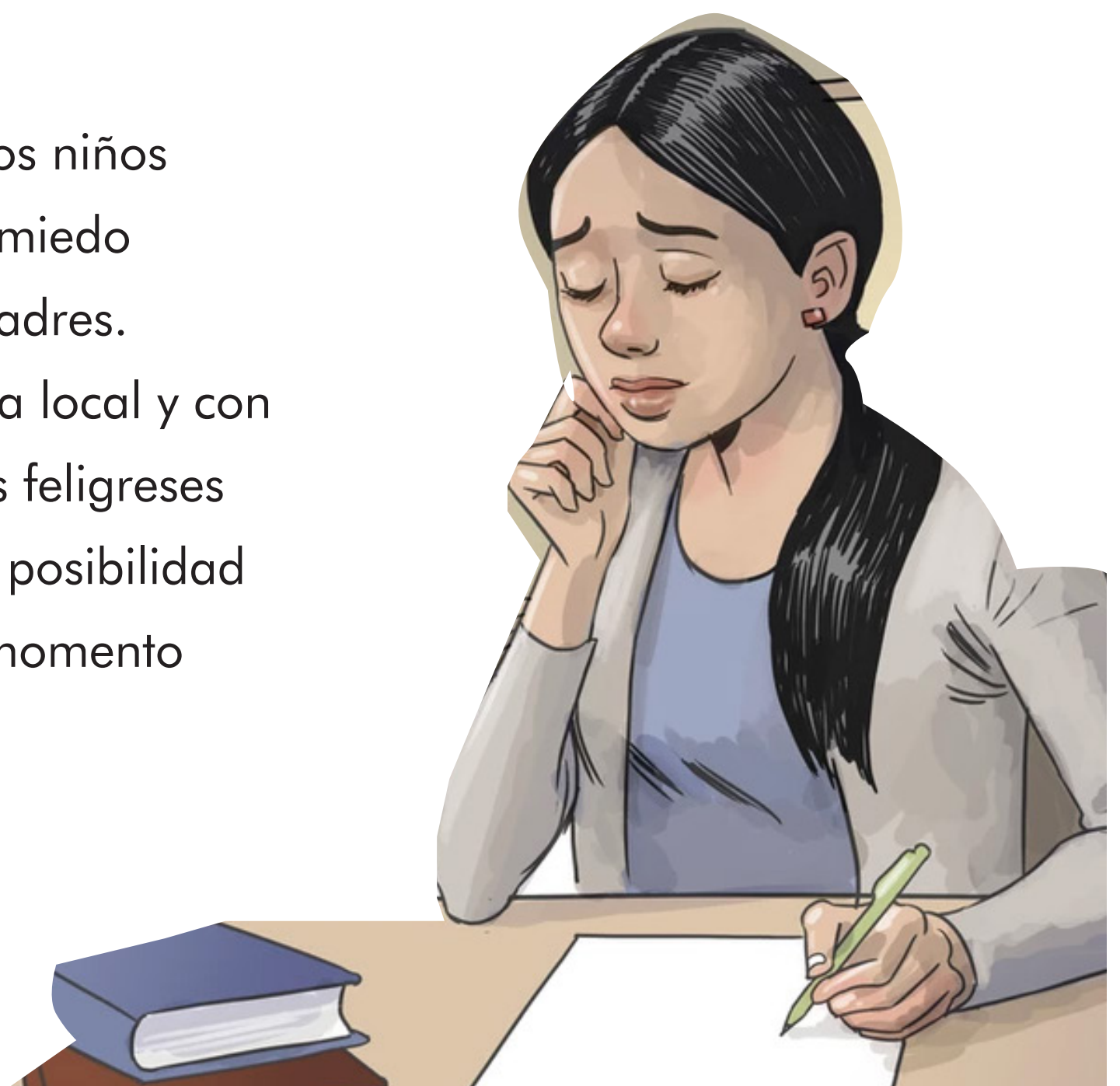


Cristina Morales, 'No quería vivir en las sombras'. Durante 20 años, el TPS permitió que ella fuese una residente legal que pagaba impuestos y era propietaria de una vivienda. Pero también hizo que todos sus logros fueran precarios. "La administración Trump aterrizó a los TPS y DACA, amenazando con una masiva deportación". Cristina - Cuando dirigió a la familia en la oración de la noche, le pidió a Dios que mantuviera a las familias unidas. Cuando sus hijos se fueron a la cama, Morales se sentó en el sofá del estudio y lloró. Esto es todo, pensó, mirando a su alrededor, su casa.

"La administración Trump aterrizó a los TPS y DACA, amenazando con una masiva deportación", dijo Morales durante una reunión en Zoom con líderes de la Alianza Nacional de TPS.

EL ULTIMÁTUM O FANTASMA DE DEPORTACIÓN

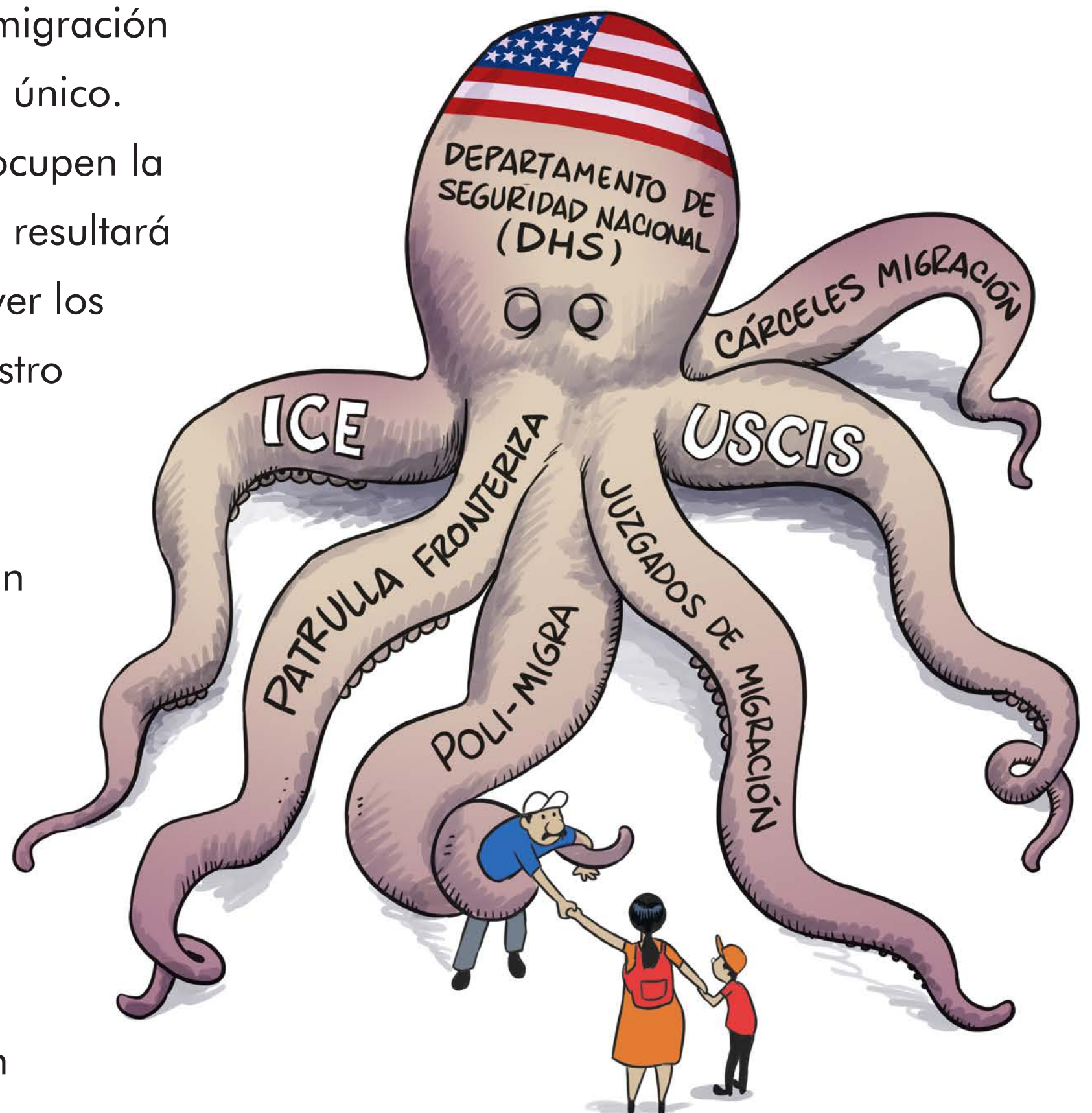
-Morales sabía cómo era la deportación. ... los niños de la escuela le decían a Morales que tenían miedo de que los agentes vinieran a llevarse a sus padres. Durante años, Morales se reunió con la policía local y con funcionarios del gobierno para defender a los feligreses indocumentados de su iglesia. Ahora, ante la posibilidad de su propia deportación decidió que era el momento de abogar por sí misma.



Dado que muchas personas tpebianas son padres de unos 273.000 ciudadanos estadounidenses —la mayoría de ellos menores de 21 años, como los hijos de Morales—, podría convertirse en la mayor operación de separación familiar de la historia de Estados Unidos.

LA INMIGRACIÓN ES UN SISTEMA LEGAL SEPARADO GOBERNADO POR LA BUROCRACIA FEDERAL

A menudo hablamos de la inmigración como si se tratara de un tema único. Pero aunque los demócratas ocupen la presidencia y el Congreso, les resultará excepcionalmente difícil resolver los numerosos problemas de nuestro bizantino sistema. En Estados Unidos, la inmigración tiene un sistema legal separado, con tribunales y leyes separadas, donde algunos de los principios fundamentales de nuestro sistema judicial normal —como la independencia de los jueces, el derecho a la representación legal y el derecho a un juicio con jurado— simplemente no existen.



La política de inmigración es decidida por varias partes diferentes de la

burocracia federal, entre ellas el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional.

La aplicación de la ley de inmigración implica un enorme aparato que puede incluir agentes federales de la Patrulla Fronteriza, agentes de ICE y departamentos de policía locales, así como centros de detención que varían en calidad desde tiendas de campaña hasta prisiones reformadas. La inmigración es un tema legal, un tema laboral, un tema de seguridad y un tema de política exterior.

NOS DIJERON QUE TENÍAMOS QUE ESPERAR PORQUE ÍBAMOS POR LA ENCHILADA COMPLETA

Cuando Donald Trump fue elegido, su gobierno promulgó su propio tipo de reforma migratoria con notable eficiencia. Bajo la dirección de su primer fiscal general, Jeff Sessions, y su asesor principal, Stephen Miller, los funcionarios cambiaron más de 1000 normas, interpretaciones y directivas en todo el sistema de inmigración, lo que dificultó la entrada legal de los inmigrantes y facilitó su expulsión.



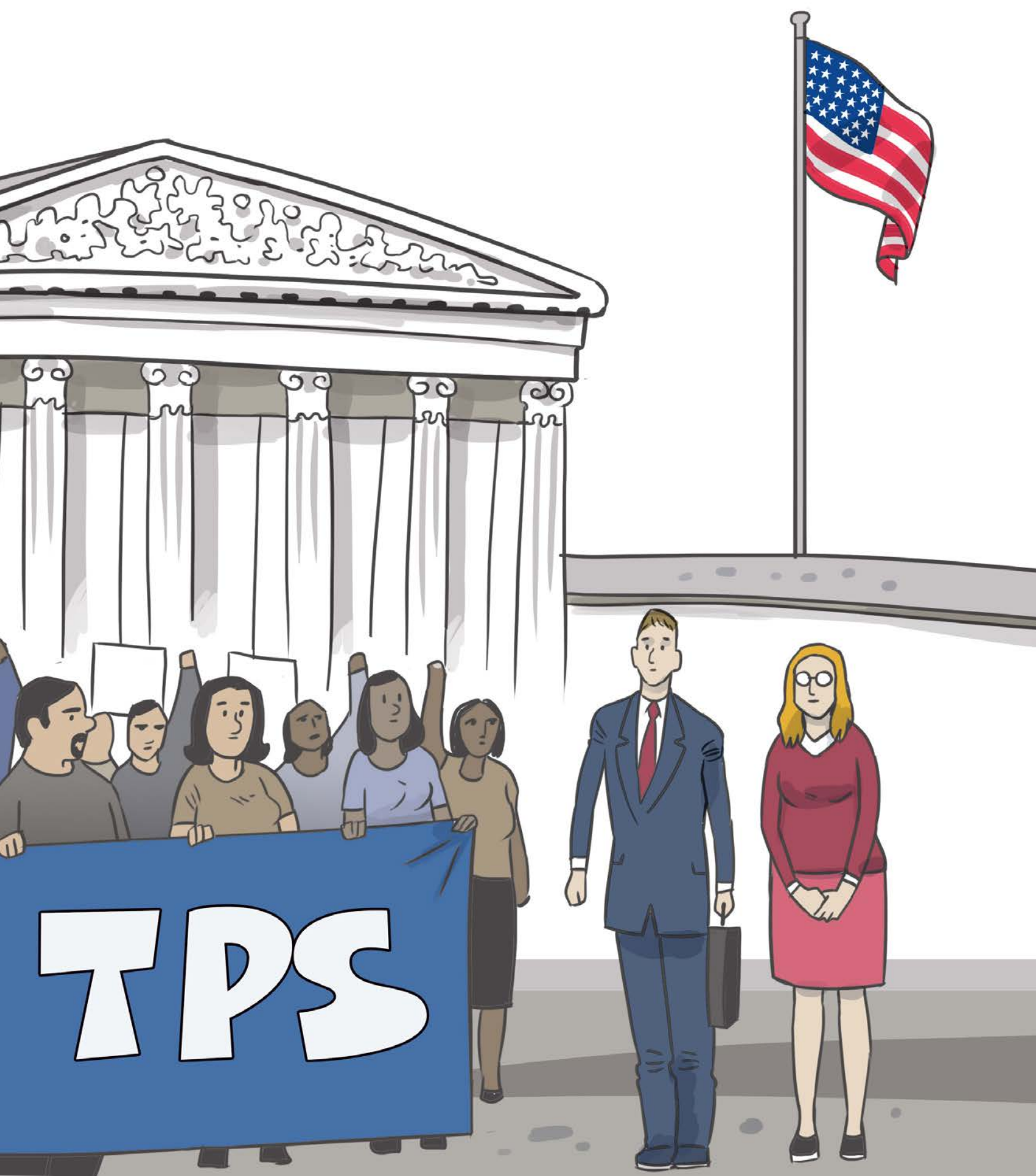
Hablar de reformar todo el sistema con un proyecto de ley integral es desconcertante, pero eso es exactamente lo que varias de las principales organizaciones nacionales de derechos de los inmigrantes han estado haciendo durante décadas. Biden sigue con la misma idea. Esa parecía ser la estrategia del nuevo gobierno cuando publicó una “hoja informativa” de cuatro páginas en la que se detallaba un audaz plan de reforma integral de la inmigración.

La hoja informativa parecía la lista de deseos de un defensor de la inmigración, pero todos los activistas del TPS con los que hablé en enero la recibieron con más escepticismo que alegría. Sin embargo, ningún proyecto de ley de reforma migratoria integral que implique la legalización ha sido aprobado por el Congreso desde 1986, y el repetido fracaso de esos proyectos de ley dejó a los titulares del TPS en una situación vulnerable cuando Trump ganó la presidencia en 2016.



Realidad Actual: PERSONAS CON TPS 'REHENES DE UNA FALLIDA IDEA DE REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL

Pero a menos que el Congreso apruebe una legislación que otorgue a los titulares del TPS un estatus permanente o que el gobierno del presidente Joe Biden emita nuevas designaciones del TPS para los seis países, la expulsión forzada de 402.000 titulares del TPS podría comenzar tan pronto como en octubre. Dado que son padres de unos 273.000 ciudadanos estadounidenses —la mayoría de ellos menores de 21 años, como los hijos de Morales—, podría convertirse en la mayor operación de separación familiar de la historia de Estados Unidos.



NUESTRAS VIDAS NO SON TEMPORALES

La lucha continúa



¡Residencia Ahora!